

BIDeconomics República Dominicana

**Oportunidades para un
desarrollo sostenible,
inclusivo y resiliente**

Contenido

3 - 4 Proceso del documento

5 - 12 Más capital humano en cada etapa del ciclo de vida

- 1.1 Atender a la primera infancia
- 1.2 Aumentar la calidad de la educación y preparar a los jóvenes para un empleo digno
- 1.3 Lograr un sistema de salud de calidad y con enfoque en la prevención
- 1.4 Protección social efectiva para los más vulnerables

13 - 17 Más independencia y calidad en las instituciones

- 2.1 Afianzar la equidad, eficiencia y sostenibilidad de las finanzas públicas
- 2.2 Transformar al sector público y consolidar un gobierno digital
- 2.3 Fortalecer la confianza en las instituciones con más justicia para todos

18 - 25 Más potencial productivo para liderar el crecimiento de la región

- 3.1 Infraestructura para la competitividad y sustentabilidad: agua potable, residuos sólidos, energía, movilidad y transporte sostenible
- 3.2 Incrementar el acceso al financiamiento productivo
- 3.3 Potenciar la innovación, desarrollo tecnológico y formación técnica

26 - 27 Ser líder en previsión y adaptabilidad ante posibles cambios futuros

- 4.1 Implementar estrategias de adaptación y mitigación ante riesgos globales: climáticos y sanitarios

28 En resumen

Este documento fue preparado por Joaquín Zentner (CID/CDR), Fanny Vargas (CID/CDR) y Elizabeth Ochoa (consultora de CID). Con participación del equipo de BID Invest (DSP/DCO) María Cecilia Acevedo, Paula Castillo, Marcelo Paz, Juan Flores, Alejandra Durán, Joaquín Lennon y Adriana Valencia. Miguel Coronado (CID/CDR) y Marta Ruiz-Arranz (CID/CID) contribuyeron con sus comentarios y orientaciones. Quisiéramos agradecer especialmente la colaboración e insumos de: Smeldy Ramírez Rufino (BID Lab); Benoit Lefevre, Raúl Delgado (CCS); Jennelle Thompson (EDU); María Teresa Villanueva (GDI); Michael Hennessey y Geovana Acosta (CTI); María Victoria Fazio (LMK); Juan Cruz Vieyra (ICS); Mario R. Durán Ortiz (HUD); Bruno Jaquet y Olga Gómez García (RND), Sergio Pérez Monforte y Juan Alfredo Rihm Silva (WSA), Ana Arias Urones (INT), Héctor Baldivieso (ENE); Carolina González Acero (SPH); Manuel Rodríguez (TSP), Eduardo Sierra y Omar Villacorta (CMF); Belinda Pérez y Ariel Zaltsman (FMM), Patricia Reinoso y Carla Sosa (CID/CDR); y Omar Zacarías (BID Invest).



Proceso del documento



Sin embargo, persisten desafíos importantes para alcanzar el progreso inclusivo y equitativo. Una de las dimensiones de la igualdad es la equidad de oportunidades en la vida, que implica el acceso equitativo a bienes y servicios fundamentales como, por ejemplo: salud, alimentación, educación, agua y saneamiento; así como la tenencia de un conjunto mínimo de activos que determinan en gran medida las posibilidades de mejorar la calidad de vida y el nivel de ingreso de una persona, independientemente de su origen o circunstancias socioeconómicas. La inequidad de oportunidades se expresa, más claramente, en la baja calidad de la educación y en las deficiencias del sistema de salud, que se constituyen en trabas para potenciar el capital humano y se traducen en menores ingresos en el mercado laboral y en impedimentos para el desarrollo de actividades productivas y el logro de un mejor nivel de vida.

Si bien el documento no pretende hacer hincapié en temas coyunturales, la crisis originada por **la pandemia de COVID-19** traerá cambios que vinieron para quedarse. Toda la economía será distinta, con grandes transformaciones en la educación, la salud, la forma de hacer las compras y la necesidad de tener ciertos bienes que antes no eran relevantes. Creemos que ser resilientes y adaptarse rápidamente, incorporando una mirada de largo plazo, puede ser una gran oportunidad para los dominicanos y las dominicanas. Después de un riguroso proceso de análisis y con el objetivo de seguir trabajando de la mano con el país en la búsqueda de una sociedad que garantice la igualdad de oportunidades para todos sus habitantes, presentamos un documento que esperamos sirva como hoja de ruta hacia el desarrollo sostenible e inclusivo de República Dominicana.



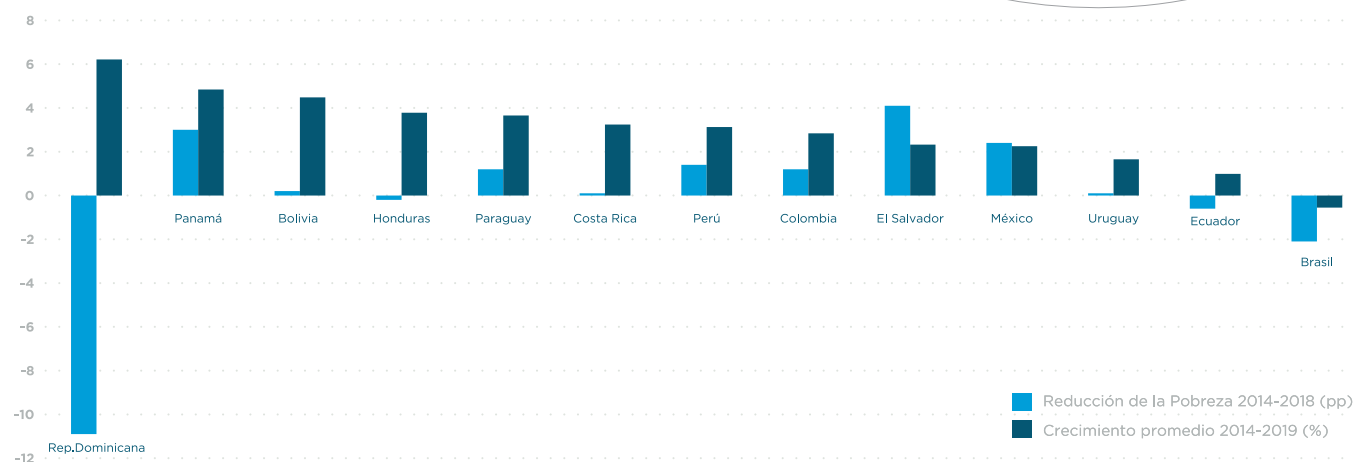
República Dominicana

Apuesta a un gran futuro

En los últimos 5 años República Dominicana ha crecido a un ritmo promedio del 6% anual, desempeño que además de ser el mayor de América Latina y Caribe (ALC) le ha permitido cerrar la brecha de ingreso per cápita con relación a la región. La inversión ha sido una de las más altas de ALC, cercana al 25% del PIB, y el nivel de empleo alcanzó el 60% de la población en edad de trabajar, superior a la media regional. El ingreso per cápita aumentó un promedio de 5% anual, propiciando mejoras en la equidad y los mayores avances en la región en cuanto a la reducción de la pobreza.



Reducción de la pobreza (2014-2018)



Fuente: FMI y CEPAL. *Los países que no aparecen en la muestra no tenían datos de pobreza disponibles al 2018. Datos de crecimiento estimados al 2019.

El aumento del ingreso ha sido fundamental para mejorar el bienestar de la población, pero falta mucho por hacer. Entre el 2014 y el 2018, los niveles de pobreza del país se redujeron del 35% al 23%, mientras la pobreza extrema descendió del 8% al 3%. A pesar de estos avances, todavía son muchos los hogares que se encuentran en condición de pobreza o de vulnerabilidad socioeconómica, y las desigualdades sociales, territoriales y de género son todavía altas.

Las limitaciones para transformar el crecimiento económico en bienestar social obedecen a un amplio rango de factores. Por un lado, la baja productividad de la economía ha limitado la generación de empleos de calidad, con mejores salarios y acceso a protección social. Por otro, los pocos avances en la independencia y consolidación institucional del país han afectado la provisión efectiva de bienes y servicios públicos necesarios para reducir las desigualdades. Así, muchos ciudadanos todavía no cuentan con una educación y salud de calidad, acceso al agua potable y saneamiento; conectividad física y tecnológica, seguridad social y ciudadana, y acceso a la justicia. Estas limitacio-

nes en la prestación de bienes y servicios públicos dificultan la acumulación de capital humano de grandes segmentos de la población y el desarrollo productivo.

La emergencia sanitaria del COVID-19 y sus enormes efectos económicos acentúa las inequidades sociales. Los trabajadores de menores ingresos que se mantienen trabajando lo hacen en actividades donde el teletrabajo no es posible, aumentando su riesgo de contagio. Además, que en muchos casos no habitan en hogares con condiciones para mantener el aislamiento social y que carecen de conectividad para que sus hijos puedan tener continuidad educativa mientras se mantienen cerradas las escuelas. La gran informalidad de la economía dificulta la cobertura de protección social para los trabajadores independientes y las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), que tienden a concentrarse en sectores especialmente vulnerables a la pandemia como los servicios y el comercio minorista. Por lo tanto, las tasas de pérdida de empleo y cierre de empresas serán particularmente acuciantes para los quintiles más pobres, lo que aumentará la desigualdad.

El reto del país en los próximos años es lograr un crecimiento duradero con el mayor impacto posible sobre los niveles de bienestar. Por tanto, la mejor apuesta por el futuro es profundizar en una agenda de reformas estructurales que permita cerrar las brechas sociales y económicas presentes, a la vez de preparar al país para afrontar los nuevos desafíos en un contexto mundial cada vez más complejo y cambiante. De lograrlo, el país continuará liderando el desarrollo económico y social de ALC y será el modelo de la región en el siglo XXI.

¿Cuáles son las medidas necesarias para que el país sea el modelo del siglo XXI?

República Dominicana se encuentra en un punto de inflexión en la ruta hacia el desarrollo económico y social. Desde la perspectiva del BID, para avanzar hacia una mayor inclusión y bienestar social y económico es necesario abordar tres desafíos fundamentales: capital humano, capacidad institucional y transformación productiva.

1. MÁS CAPITAL HUMANO EN CADA ETAPA DEL CICLO DE VIDA

La población ha avanzado de forma importante en sus niveles de escolaridad y esperanza de vida, situando al país, hoy en día, en un nivel alto de desarrollo humano (Índice de Desarrollo Humano 2018: 0.745). Pero persisten importantes rezaños en cada etapa del ciclo de vida: en la infancia, los dominicanos se enfrentan a altas tasas de mortalidad materna e infantil, así como a un limitado acceso a la educación inicial. En la niñez y adolescencia reciben una educación de baja calidad y están muy expuestos al abandono escolar y los embarazos tempranos. Al llegar a la edad adulta tienen pocas oportunidades de obtener empleos de calidad y, por tanto, al envejecer la mayoría carece de protección social para enfrentar las limitaciones propias de esta etapa de la vida.



Estas dificultades se profundizan en la población pobre, las mujeres y los habitantes de zonas rurales o de ciertas regiones del país (como las provincias del Sureste), reforzando las desigualdades sociales y afectando la cohesión territorial. Las causas de estas limitaciones son multidimensionales, pero sobresale la baja capacidad del sector público para prestar servicios básicos de educación y salud con la cantidad y la calidad necesaria, y para proveer una efectiva red de asistencia y protección social.

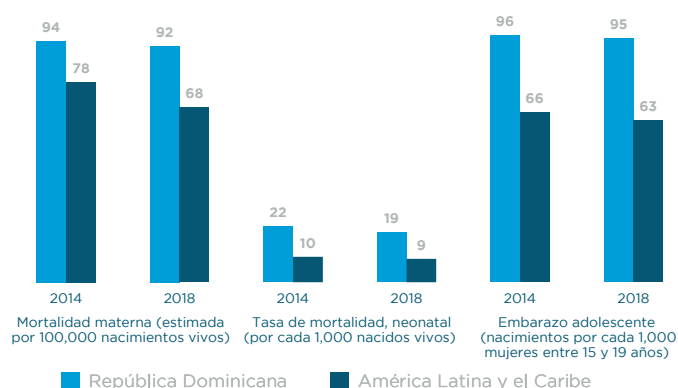
1.1 Atender a la primera infancia

“Un niño que nace hoy en República Dominicana, cuando tenga 18 años, tendrá la mitad (49%) de la productividad que si éste hubiera recibido una educación completa y disfrutado de una salud óptima”

Índice de Capital Humano 2018, Banco Mundial

Los niños y niñas del país merecen lograr su potencial cognitivo, social y afectivo. En República Dominicana se han dado importantes pasos para reducir la mortalidad materna e infantil (en 2019 las tasas cayeron un 31% y 25%, respectivamente), pero las tasas siguen siendo altas y superan por amplio margen a las de ALC. Gran parte de las defunciones (cerca del 98%) ocurren en los centros de salud y por causas prevenibles. Las adolescentes han sido particularmente afectadas por este fenómeno, al tener la tasa de fecundidad más alta de ALC (2018). Uno de los factores detrás de estos indicadores son las deficiencias del servicio en los centros de salud e inadecuadas condiciones sanitarias.

Indicadores de la salud materna e infantil



Fuente: Banco Mundial & Organización Panamericana de la Salud

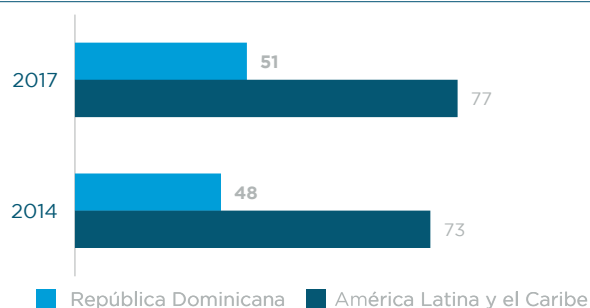
El entorno y hábitat de los infantes deberían ser más saludables y seguros

Además de los riesgos para la salud, las deficiencias del servicio de agua potable implican altos costos de bolsillo: para una familia de 4 personas el costo mensual de abastecerse de agua potable es del 3% al 9% del salario mínimo privado, y para agua de uso doméstico fuera de la red pública asciende al 67% del salario mínimo privado

Cálculos propios

En el país muchas de las muertes y enfermedades diarreicas y respiratorias que sufren las madres, niños y niñas ocurren por deficiencias de los servicios sanitarios básicos, como acceso al agua potable (el 13.3% de la población carece de este servicio) y al saneamiento. El porcentaje de la población que hace uso de inodoro es un 70%, pero el acceso al alcantarillado es tan solo del 30%, lo que indica la gran cantidad de sépticos y filtrantes que impactan las aguas subterráneas y superficiales creando fuente de contaminación y enfermedades. Estos riesgos se amplifican en la población más pobre, que tiende a vivir en áreas periurbanas y rurales, en viviendas precarias, en condiciones de hacinamiento, y con servicios deficientes o ausentes, especialmente la gestión de residuos sólidos y saneamiento. Los hogares más pobres detentan un 69% del déficit habitacional del país, con viviendas que son más vulnerables ante fenómenos climáticos. Estas características hacen a los hogares más pobres muy vulnerables ante el COVID-19, pues potencian el contagio en el núcleo familiar.

Matrícula bruta en el nivel inicial



Fuente: Banco Mundial

El desarrollo infantil temprano requiere una mayor asistencia a la educación inicial. La construcción de más estancias infantiles y centros de cuidado diario en los últimos años ha permitido aumentar la cobertura de este nivel educativo del 47% en 2014 al 51% en 2018 (78% ALC), pero todavía cerca del 50% de niños entre 3 y 5 años no están matriculados y la oferta de este servicio es limitada, más para los infantes de menores ingresos y de zonas remotas o rurales del país.



Oportunidades:

- Ampliar la oferta y el alcance de los servicios de salud dirigidos a las madres y los niños y niñas. Enfocarse en la salud preventiva, aumentando la cobertura de la atención primaria en zonas pobres y aisladas, teniendo en cuenta la interdependencia que existe entre la salud de las madres y la de sus hijos recién nacidos.
- Mejorar la cobertura y calidad de la educación inicial, preferentemente en las zonas de mayor rezago económico, asegurando la universalización del grado y la provisión profesional y adecuada de los servicios de estimulación psicoafectiva y cognitiva.
- Mejorar los programas de residencias médicas y la formación de otros profesionales de salud (médicos familiares, enfermeras, etc.) y fortalecer el desarrollo de competencias para el desempeño en la gestión de los servicios de salud.
- Revisar las normas y estándares mínimos de calidad para los establecimientos de salud, sobre todo los referentes a la salud materno-infantil.
- Implementar un marco de políticas integrales para la primera infancia dentro del cual se combinen programas de salud, nutrición y estimulación temprana para el padre y la madre, apoyando la promoción y educación durante el embarazo, el parto, postparto y el crecimiento y desarrollo de su bebé.
- Implementar medidas preventivas como programas de educación y salud sexual y reproductiva en escuelas y centros de salud.
- Ampliar la cobertura y calidad los servicios de agua potable y saneamiento con obras de rehabilitación y ampliación de los sistemas existentes, especialmente en zonas rurales y comunidades pobres. Priorizar inversiones en alcantarillado y plantas de tratamiento, así como en la mejora de la gestión de pozos sépticos. Para los residuos sólidos, implementar un sistema de disposición final adecuado y fomentar la participación privada en la gestión y operación de estos servicios.
- Introducir programas de vivienda asequible mediante esquemas de subsidios y bonos de vivienda; y mejorar las condiciones de habitabilidad de los asentamientos precarios con la prestación de servicios de sociales, infraestructura básica y transporte público. Además de continuar con los programas de reasentamiento de las viviendas ubicadas en zonas de riesgo y minimizar los costes humanos por desastres naturales.
- Aprobar la Ley de Ordenamiento Territorial, e incluir la reforma institucional de las entidades relacionadas al sector vivienda y creación un ente regulador.
- Fomentar estrategias educativas, sociales y legales para prevenir el embarazo adolescente, las uniones tempranas y sus consecuencias.

1.2 Aumentar la calidad de la educación y preparar a los jóvenes para un empleo digno

A pesar de los esfuerzos del gobierno por mejorar la calidad de la educación, los indicadores demuestran que los jóvenes continúan presentando serias deficiencias en competencias básicas de aprendizaje. El país se situó en el último lugar (de 82 países) en el desempeño en la prueba del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA) 2018 para matemáticas y ciencias, y en penúltimo lugar para lectura, área en la cual el retraso del país en comparación a la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es equivalente a 4 años de escolaridad. Entre las principales causas de estos rezagos se destacan el bajo desempeño docente, las ineficiencias del gasto público en el sector y la falta de cobertura para algunos niveles y zonas del país.

Resultados PISA 2018

(Tasa de desempeño en lectura %)



Fuente: BID-OCDE

Tasa de asistencia escolar bruta de educación media (%)

República Dominicana

68

América Latina y el Caribe

83

Fuente: UNESCO



Lo anterior influye en bajos niveles de matriculación y la alta tasa de deserción en la educación media, especialmente de los estudiantes más pobres.

La tasa bruta de inscripción en este nivel se acerca al 80% (96% ALC) y se encuentra estancada desde hace más de una década. El 56% de los jóvenes del quintil más pobre no termina la escuela secundaria en comparación con solo el 17% del más rico, siendo las principales causas del abandono escolar: la falta de recursos y la necesidad de aportar dinero al hogar. Para las mujeres, las principales causas para que el 40% abandonen los estudios son los embarazos y las uniones a temprana edad.



Las competencias que provee el sistema educativo dominicano tienen limitada vinculación con las que requiere el mercado laboral.

Solo un tercio de las empresas considera que su fuerza laboral tiene una educación adecuada para el trabajo, una baja proporción de los jóvenes tienen educación terciaria, y existe un déficit de capital humano especializado en ciencia y tecnología, áreas determinantes para preparar al país en su inserción digital y en los empleos del futuro.



La crisis sanitaria detuvo las labores presenciales del sistema educativo, y es probable que no se retomen hasta el próximo año escolar.

De preescolar hasta secundaria se estima que hay casi 2.5 millones de estudiantes afectados, tanto del sector público como del privado. La suspensión de las clases presenciales impacta la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y la economía familiar debido a la disrupción de los apoyos extraescolares que representan los servicios de los centros educativos (alimentación y cuidado de los estudiantes). A raíz de la suspensión de las clases presenciales se emplean plataformas digitales, medios de radio y televisión, y materiales físicos con contenido curricular para continuar con las clases desde casa. Se han creado grupos de mensajería digital para la comunicación docentes-padres y docentes-estudiantes, y una línea telefónica directa para ofrecer apoyo emocional a estudiantes, docentes y familias. La crisis ha representado un reto para el sector en distintos aspectos: la falta de conectividad en muchos hogares y centros educativos limita la educación en línea, y las pruebas nacionales y diagnósticas de este año han tenido que ser suspendidas. Los ministerios de Educación (MINERD) y Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) acordaron emitir una constancia de grado a los estudiantes de sexto de secundaria que van a Pruebas Nacionales en septiembre de 2020 y requieren de dicho documento para inscribirse en agosto en las universidades, tanto en el país como en el exterior.

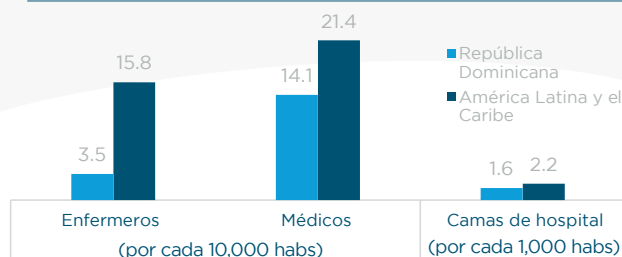


Oportunidades:

- Durante la emergencia sanitaria se hace crucial definir los contenidos educativos prioritarios y planear continuidad del servicio educativo en base a las condiciones particulares de la población utilizando modalidades pertinentes (contenidos digitales, radio, tv, etc.), y mantener los vínculos entre docentes, estudiantes, centros educativos y familias.
- Planificar el acondicionamiento de las condiciones sanitarias de los centros educativos para la reapertura, y los protocolos para su operación.
- Continuar en la profesionalización de la carrera docente. Se deben profundizar los esfuerzos de capacitación y nivelación de los docentes, e implementar la evaluación permanente y de certificación con base en estándares de la carrera docente diseñados por el MINERD; estos programas deben promover y reforzar las habilidades digitales docentes. Además, establecer un esquema de incentivos por desempeño, que promueva el traslado de docentes altamente capacitados, hacia las escuelas ubicadas en los distritos con mayores necesidades.
- Mejorar la eficiencia del gasto educativo, condicionando los aumentos de salario docente a las evaluaciones de desempeño; cambiando las entregas físicas de uniformes, zapatos y útiles escolares por transferencias en efectivo; y revisando el sistema de sorteos de adjudicación para la construcción de infraestructura escolar para estandarizar los costos de construcción.
- Ampliar la cobertura de educación secundaria mediante la aplicación de métodos educativos innovadores para la población joven ubicada en zonas de difícil acceso y en condiciones de mayor pobreza y vulnerabilidad.
- Mejorar las habilidades y competencias digitales de los jóvenes mediante una mayor cobertura y acceso a las tecnologías de información en escuelas y centros de capacitación, ampliando y profundizando la iniciativa emprendida con el programa República Digital. Debido a la emergencia sanitaria, la ampliación del acceso a la conectividad de los estudiantes de bajos recursos es aún más importante.
- Expandir la oferta de educación técnico profesional del segundo ciclo de educación secundaria y de proyectos de formación profesional a través del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y otras instituciones formativas como, por ejemplo, el Parque Cibernético, incorporando el enfoque de género y el acceso equilibrado. Incorporar incentivos para que las jóvenes adolescentes a continuar sus estudios, a pesar del embarazo o la unión temprana.
- Estimular programas de inversión en capacitación conjunta público-privada para mejorar las competencias de los jóvenes que se incorporan a la fuerza laboral, para la de capacitación de la mano de obra en habilidades digitales.

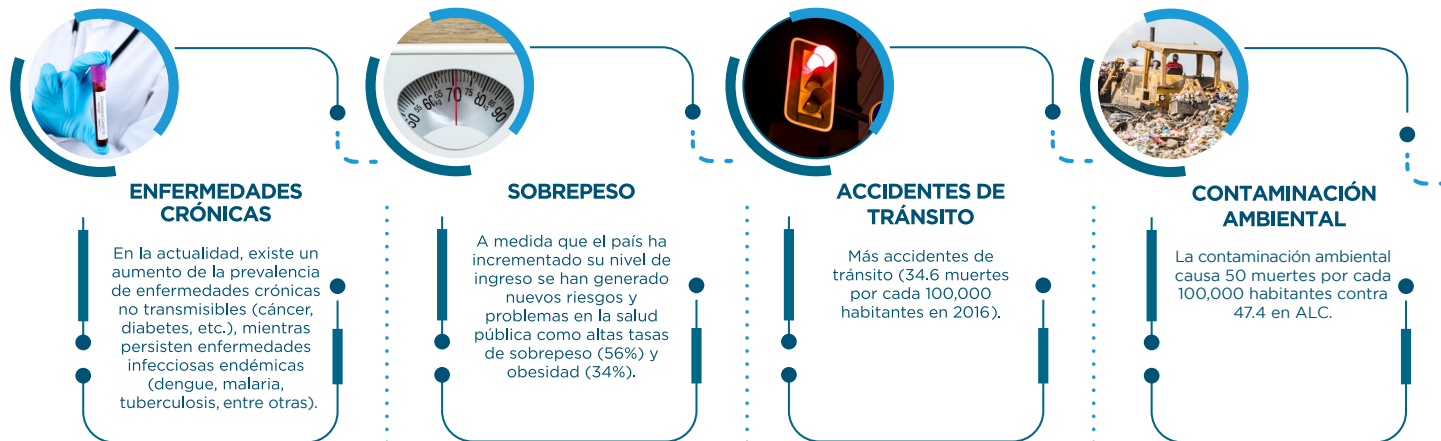
1.3 Lograr un sistema de salud de calidad y con enfoque en la prevención

Cobertura del personal sanitario e insumos disponibles



Fuente: OPS y Banco Mundial

El país tiene tareas pendientes en materia de salud



El sistema de salud tiene espacios de mejora en términos de calidad y cobertura



La atención al COVID-19 afecta la disponibilidad de recursos humanos y financieros del sistema de salud





Oportunidades:

- Fortalecer la sala de situación del Ministerio de Salud Pública (MSP), de manera que sea posible hacer un monitoreo continuo al perfil epidemiológico de la población, con el fin de facilitar la toma de decisiones ante futuros brotes y lo que se pueda requerir como parte de la etapa post pandemia.
- Establecer los mecanismos de evaluación de los efectos de las medidas de control de COVID-19, tanto en la curva epidémica como en la oferta de servicios de salud, y otros aspectos relevantes. Analizar el impacto en la facturación de los hospitales y la reconfiguración del personal en los tres niveles de atención.
- Implementar medidas en el corto plazo para garantizar y reestablecer la atención en salud de población vulnerable (enfermos crónicos, embarazadas, enfermos de tuberculosis y VIH) como la provisión de medicamentos, vacunas y métodos anticonceptivos para mujeres en edad fértil, así como la estrategia de Detección, Diagnóstico, Tratamiento, Investigación y Respuesta para la malaria y atención de otras enfermedades infecciosas (dengue, cólera).
- Establecimiento de criterios epidemiológicos sobre la evolución del COVID-19 para la toma de decisiones sobre la reanudación gradual de servicios hospitalarios y otras actividades de salud (consultas, cirugías no esenciales, campañas y jornadas extramurales, búsqueda activa de pacientes, etc.)
- Fortalecer la oferta y mejorar la calidad de servicios de salud con énfasis en la prevención y promoción de la salud a través de la implementación efectiva del modelo de redes integradas de servicios, reforzando especialmente el primer nivel de atención, que se ha debilitado debido a la reorientación de recursos hacia hospitales para la atención del COVID-19.
- Incrementar el gasto público en salud en el primer nivel de atención, y en prevención y promoción de la salud, así como mejorar el financiamiento del resto del sistema mediante el uso eficiente y transparente de los recursos.
- Fortalecer la institucionalidad y la gobernanza del sector a través de la delimitación de un esquema de responsabilidades claras entre los actores de la red que derive en protocolos de continuidad asistencial y técnicos oportunos, y que fomente la coordinación intersectorial y genere información medible para evaluar resultados.
- Mejorar la formación de los profesionales de salud, establecer mecanismos de monitoreo y evaluación de la calidad y profesionalización de los servicios en un sector muy fragmentado, delineando corresponsabilidades entre el MSP y el Servicio Nacional de Salud (SNS); e impulsar la implementación de la Ley de Carrera y Profesionalización Sanitaria.
- Trabajar en el plan de manejo integral de desechos y residuos sólidos hospitalarios y del sector salud.



1.4 Protección social efectiva para los más vulnerables

Las políticas de asistencia social han resultado claves en la reducción de la pobreza. El aumento de los ingresos laborales junto al gasto público en protección social, especialmente a través de Progresando con Solidaridad (PROSOLI), el cual ha beneficiado a la población más pobre (17% de los hogares en 2018). Sin embargo, se podrían lograr mayores reducciones en los niveles de pobreza con mejoras en el diseño, la focalización, y la calidad de implementación de los programas que conforman el gasto en protección social, para que aumente la cobertura y el apoyo a la población objetivo. La creación del programa temporal “Quédate en Casa” como respuesta de protección social ante los efectos económicos de la pandemia de COVID-19 representó un paso en la dirección correcta, al incluir en las transferencias a las familias más pobres y algunos trabajadores informales muy vulnerables que se encontraban fuera de PROSOLI, pero persisten los problemas de filtración por la inclusión de hogares que no califican para los beneficios.

El sistema de seguridad social ha logrado avances en cobertura, pero reformas en su diseño podrían asegurar su sostenibilidad financiera. A pesar de los avances, la cobertura de seguridad social a través del mercado de trabajo sigue siendo una de las más bajas de la región, con un 77% de la población asegurada. Solamente el 38% de la población cotiza a la seguridad social y menos del 15% de los mayores de 65 años recibe alguna pensión que, además, es insuficiente. El diseño del sistema de seguridad social, entre régimen subsidiado y no contributivo, ha incentivado a la no contribución, reduciendo la tasa de reemplazo y poniendo en riesgo su viabilidad financiera. Es probable que, en el futuro, la magnitud de los problemas de cobertura y suficiencia de las pensiones se incrementen, por el envejecimiento poblacional y los cambios tecnológicos del mercado laboral, lo que implicará mayores presiones al gasto en protección social y sobre las finanzas públicas.

Oportunidades:

- Fortalecer las herramientas con las que cuenta PROSOLI para reducir las tasas de filtración y subcobertura. Se debe diseñar un plan de desmonte gradual del programa “Quédate en Casa” que incluya una estrategia de migración de los hogares más vulnerables hacia el PROSOLI, y revisiones de los criterios de elegibilidad y las estrategias de salida del programa para los hogares que no califican, para hacerlos efectivos.
- Fortalecer el diseño de los beneficios de PROSOLI para aumentar y diferenciar las transferencias entre los niveles de pobreza de los receptores.
- Racionalizar y mejorar la oferta programática del gasto en asistencia social, promoviendo intervenciones que consideren un enfoque de ciclo de vida, un sistema único de focalización y de rendición de cuentas por resultados; debe garantizarse la coordinación de los programas sociales y evitar la duplicidad.
- Aumentar la cobertura de la seguridad social en cantidad y calidad, considerando las características del mercado laboral, los grupos más afectados por los déficits de cobertura y la discriminación por sexo, así como alcanzar los montos de prestaciones adecuados.
- Mejorar el diseño del sistema de seguridad social para reducir las disparidades y complejidades entre los regímenes subsidiado y contributivo.
- Usar sistemas digitales de información para facilitar el seguimiento de la situación de cobertura actual y potencial de los beneficiarios, y la gestión y fiscalización de todo el sistema. Fomentar el uso del Sistema Único de Beneficiarios, como fuente para la focalización de los programas sociales y la adopción de mecanismos para su interoperabilidad con otras fuentes de datos como la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de manera que se mejore la eficiencia, la transparencia y la credibilidad.
- Generar un marco adecuado para garantizar el aseguramiento ante riesgos de todos los dominicanos, explorando la expansión de la cobertura del sistema de seguridad social o la creación de un seguro universal.

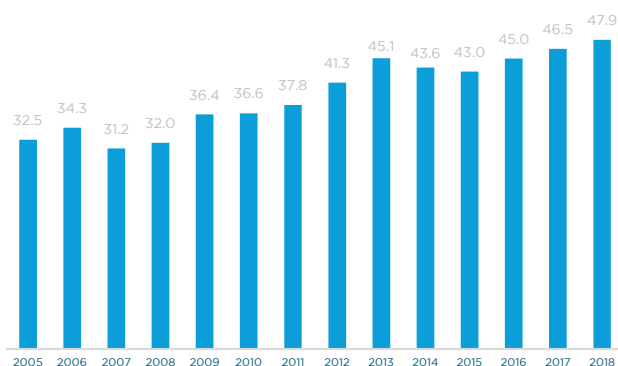
2. MÁS INDEPENDENCIA Y CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES

2.1 Afianzar la equidad, eficiencia y sostenibilidad de las finanzas públicas

Instituciones de calidad y la confianza que los dominicanos depositen en ellas, serán los pilares para llevar a cabo las reformas estructurales que el país necesita.

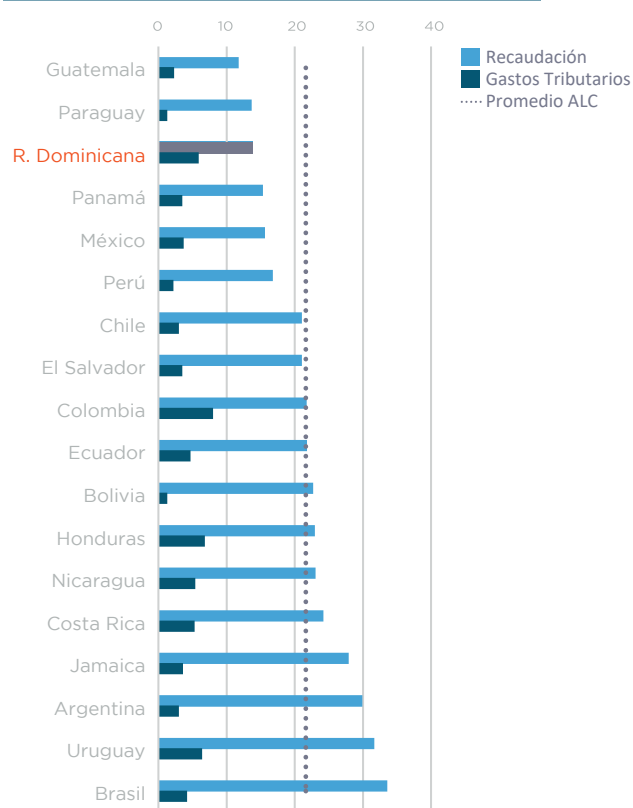
Las cuentas fiscales de República Dominicana presentan serios desequilibrios desde hace más de una década, empujando al alza la deuda del sector público. El gobierno ha realizado esfuerzos para revertir esta tendencia, fortaleciendo la administración tributaria y controlando el gasto público. Sin embargo, estos no han sido suficientes y la política fiscal no cuenta con el espacio necesario para aumentar su progresividad en favor de los más pobres, ni para suavizar los ciclos económicos. Esta estrechez surge, por un lado, de altos niveles de evasión y elusión fiscal, que socavan las recaudaciones, y por otro, de la ineficiencia y rigidez del gasto público. A esta situación se suma el choque de la pandemia, pues la reducción de la actividad económica generada por las medidas de contención del COVID-19 implicarán una merma significativa de las recaudaciones, al mismo tiempo que se requiere un mayor nivel de gasto para la salud, la protección social y el apoyo al tejido económico. Tampoco se cuenta con un marco de responsabilidad fiscal que limite el nivel de gasto y el endeudamiento público durante el tiempo en consonancia con los objetivos de desarrollo y con criterio de sostenibilidad, reduciendo así los riesgos fiscales y permitiendo mayor certidumbre sobre la política pública.

Deuda pública consolidada del sector público (% del PIB)



Fuente: Crédito Público

Ingresos y gastos tributarios 2018 (% del PIB)



Fuente: Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT)

Reformar el sistema tributario: movilizar más ingresos, con mayor eficiencia y equidad

En República Dominicana los ingresos tributarios son bajos en comparación a ALC. Han rondado el 13% del PIB en los últimos 5 años, mientras en la región promedian cerca de un 17% del PIB. Esto obedece, en parte, a altas tasas de evasión e importantes gastos tributarios (5.1% del PIB en 2019), que surgen del nivel de informalidad de la economía, la complejidad del sistema tributario que cuenta con diversos regímenes especiales y numerosas exenciones, y las debilidades en la fiscalización.

El sistema tributario tiene poca capacidad redistributiva y ha traído pérdidas de eficiencia económica. Las tasas reducidas y exenciones de algunos impuestos benefician más a los hogares de altos ingresos que a los pobres, además de abrir espacios para la elusión tributaria y elevar los costos de administración y cumplimiento de los contribuyentes. De igual modo, los incentivos fiscales para zonas francas y el turismo, han tenido pocos resultados y altos costos en términos de ingresos fiscales. Los incentivos generaron un costo fiscal equivalente al 0.77% del PIB (2019), 0.57% del PIB para el régimen de zonas francas industriales y el restante 0.20% del sector turismo.

Oportunidades:

- Continuar las mejoras en la gestión administrativa y de recursos humanos de la administración tributaria, incluyendo cambios en su estructura organizacional y en sus procesos operativos. Reforzar la infraestructura tecnológica para mejorar la trazabilidad de los contribuyentes y universalizar la implementación de la factura electrónica.
- Reducir los gastos fiscales mediante el rediseño de los impuestos más importantes, como, por ejemplo:
 - Reformar el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) eliminando parte de las exenciones actuales, simplificando la multiplicidad de tasas, e incorporando los bienes inmuebles y los servicios digitales a la base imponible.
 - Rediseñar el Impuesto sobre la Renta (ISR) reduciendo los rangos exentos de personas naturales y de los asalariados y eliminando o limitando las deducciones por gastos de educación (con un límite de 10% de los ingresos gravados).
 - Ampliar la base imponible del impuesto sobre los activos a terrenos e inmuebles rurales o reemplazarlo por un impuesto mínimo a la renta.
- Racionalizar los incentivos tributarios reduciéndolos gradualmente para las empresas e inversionistas en las zonas francas, así como adoptar cláusulas de caducidad para los mismos. Rediseñar para el mediano plazo nuevos esquemas de incentivos sobre la base de análisis rigurosos de costo-beneficio y dentro de un marco fiscal de mediano plazo.
- Ampliar la base impositiva de todos los impuestos mediante incentivos a la formalización laboral, en particular en los sectores de la agricultura, la construcción y las ventas minoristas.

Gastar más, mejor y responsablemente

Aumentar y mejorar la eficiencia del gasto debe ser una prioridad para mejorar la equidad, promover el crecimiento y suavizar los ciclos económicos. El gasto público es bajo en comparación con el promedio regional (17% del PIB contra un 30% del PIB). Esto se refleja en la deficiente cobertura y calidad de los servicios básicos y en las brechas de infraestructura. Asimismo, el gasto es altamente rígido, con la mayoría de los recursos comprometidos por leyes especiales, la nómina pública y el servicio de la deuda. Por otro lado, el gasto presenta ineficiencias técnicas y asignativas que implican que, en la práctica, muchos recursos se asignen a iniciativas que tienen poco retorno social. Varios estudios identifican que hay espacio de mejora en la asignación de los recursos, en la nómina pública y en la focalización de los subsidios y transferencias sociales hacia las personas que realmente lo necesitan.

La capacidad institucional para la gestión financiera y presupuestaria del gasto público presenta debilidades en la planificación, seguimiento, control y evaluación. El país ha mostrado pocos avances tanto en la implementación del presupuesto por resultados como en la planificación del gasto basada en un marco de responsabilidad fiscal de mediano plazo, lo cual ha limitado la vinculación entre los resultados presupuestarios y los grandes objetivos de desarrollo nacional. República Dominicana es uno de cuatro países latinoamericanos que carece de una Ley de Responsabilidad Fiscal y un marco presupuestario plurianual.

Oportunidades:

- Mejorar la eficiencia técnica del gasto público en la prestación de servicios básicos depurando la nómina,

racionalizando la contratación de empleados administrativos y priorizando los perfiles adecuados mediante el proceso de selección por mérito. Esto es particularmente relevante para el personal educativo y sanitario, donde se presentan las mayores brechas en la calidad de los servicios.

- Apoyar reformas que ayuden a reducir el monto de los subsidios y mejorar la focalización de las transferencias públicas hacia los hogares más pobres y vulnerables.
- Realizar análisis de costo-efectividad de las políticas públicas implementadas o por implementarse y hacer una racionalización de los programas vigentes para reducir duplicidades e inconsistencias.
- Fortalecer el proceso presupuestario y la transparencia en la gestión y uso de los recursos públicos. Para ello es necesario aumentar las capacidades institucionales para la implementación de la gestión por resultados (GPR), mejorar y automatizar los procedimientos de gestión, universalizar el uso de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) y mejorar la interoperabilidad del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) con otros subsistemas de ejecución presupuestaria.
- Ampliar el uso de plataformas digitales para mejorar los mecanismos de control del gasto (licitaciones, compras y auditorías) y de la rendición de cuentas a la ciudadanía (datos abiertos).
- Aprobar e implementar la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal que se encuentra en el Congreso Nacional, para reforzar el proceso de consolidación fiscal y de sostenibilidad de la deuda a mediano y largo plazo.



2.2 Transformar al sector público y consolidar el gobierno digital

Sin instituciones fuertes, ágiles y modernas será difícil llevar a cabo la demandante agenda de reformas estructurales que requiere el país para su desarrollo. En materia de administración pública, el gobierno tiene dificultades para dar seguimiento a sus prioridades y metas por los rezagos en planificación y en los sistemas de gestión e información del sector público. El servicio civil ha aumentado aceleradamente sin producirse una mejora en la calidad de los servicios públicos.

El país se encuentra rezagado en materia de gobernanza regulatoria y en la gestión del gobierno electrónico. Los ciudadanos y empresas enfrentan una pesada carga regulatoria y de trámites lentos y costosos, y el país se encuentra rezagado en lo concerniente a la oferta de servicios públicos digitales e interoperabilidad, requisito indispensable para la centralización y unificación de los servicios. Otro problema es la baja capacidad para resguardar la seguridad de los datos ciudadanos y activos digitales gubernamentales ante las nuevas amenazas y desafíos cibernéticos, a pesar de los avances logrados en ciberseguridad del sistema financiero. Estas amenazas son más acuciantes en el contexto de la crisis del COVID-19, que obliga a dar mayor impulso a las iniciativas de gobierno digital, especialmente los servicios, así como fortalecer los procesos y la infraestructura necesaria para el teletrabajo.

Oportunidades:

- Fortalecer las prácticas, procesos e infraestructura crítica que permitan el teletrabajo en la administración pública, con foco en servicios críticos para los ciudadanos.
- Fortalecer la gestión estratégica, coordinación, monitoreo y mejora del desempeño de la administración pública mediante un programa de reorganización del Estado, que alinee la estructura institucional en función del logro de las metas propuestas en los planes nacionales, que incluya la revisión profunda de las funciones sectoriales, la estructura organizativa y la composición de los recursos humanos.
- Mejorar la gestión de recursos humanos del Estado fortaleciendo el proceso de reclutamiento y selección basado en el mérito, controlando el proceso de creación de cargos de administrativos, y actualizar la base de datos de servidores públicos, vinculando la nómina y la escala salarial real.
- Modernizar el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) y vincularlo con la nómina.
- Para reducir la carga regulatoria y sus costos, y mejorar la prestación, se recomienda revisar los procesos y requisitos para digitalización y automatización de trámites, con particular énfasis en el fortalecimiento de la gobernanza y la coordinación interinstitucional entre los organismos competentes en el área, de manera que se pueda ampliar la oferta de servicios y trámites públicos en línea disponibles en República Digital. Asimismo, se sugiere revisar y actualizar el inventario regulatorio del portal "RD+Simple".
- Implementar de programas de mejora regulatoria en sectores estratégicos, analizando el impacto y la eficiencia de las regulaciones vigentes.
- Incrementar la disponibilidad y calidad de la información mediante la digitalización y el uso de tecnologías que faciliten la interoperabilidad entre las agencias gubernamentales, manteniendo la seguridad y resguardo de los datos y activos digitales. Esto debe enmarcarse en una estrategia de mediano y largo plazo.

2.3 Fortalecer la confianza en las instituciones con más justicia para todos

La sociedad dominicana ha ido perdiendo confianza en las instituciones. La corrupción se considera como el problema más importante del país y la nación ocupó la posición 129 de 180 países en el Índice de Percepción de Corrupción de 2018. Asimismo, los sistemas de control del Estado, como la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas del Poder Legislativo, presentan debilidades institucionales para cumplir adecuadamente sus funciones, mientras los pocos avances en la implementación de la regulación de prevención de lavado de activos mantienen al país en las listas de alto riesgo en esta materia.

Muchos de los hechos delictivos quedan impunes debido al acceso desigual, la baja calidad e ineficiencia en la provisión de justicia civil y penal. Según el World Justice Project (2019), la percepción sobre la calidad de estos servicios en el país es una de las más baja de ALC, situándose en las posiciones 24 y 20 respectivamente, de 30 países en la región. Destaca, en particular, la falta de protección a las mujeres ante el incremento de denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales no atendidas. Por otro lado, la confianza en la policía es baja, y el sistema penitenciario está sobrecargado y carece de condiciones para rehabilitar y reinserir adecuadamente a la población reclusa.

Oportunidades:

- Atender los problemas de corrupción en el sector público mediante el fortalecimiento de los órganos de control interno y externo del Estado, dotándolos de recursos necesarios y generando capacidades para la implementación de la normatividad y la persecución efectiva del delito.
- Revisar el marco regulatorio sobre conflictos de interés en la administración pública y el sistema de declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos y del servicio civil.
- Profundizar la implementación de la Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, particularmente, en la mitigación de riesgos para las personas y sectores más expuestos al lavado de dinero. Transparentar la información tributaria de personas y empresas sujetos a esta ley e implementar las sanciones adecuadas en caso pertinente.
- Ampliar el acceso a la justicia, reducir los tiempos de su aplicación mediante la mejora de estándares de calidad del sistema judicial, el fortalecimiento de las capacidades de fiscales y jueces en el uso de tecnologías de información y en temas sensibles como género, personas LGTBI y migrantes, entre otras.
- Mejorar los servicios policiales, modernizando el modelo de gestión, planificación y coordinación con el Ministerio Público e invertir en equipos y tecnologías de información para la focalización de los servicios de prevención del delito, investigación criminal y participación ciudadana.
- Minimizar el hacinamiento de los centros penitenciarios revisando periódicamente las penas y mejorando su gestión administrativa, sus recursos humanos y los servicios de rehabilitación y resocialización para evitar la reincidencia criminal.
- Implementar sistemas tecnológicos para la eficiente gestión penitenciaria a nivel nacional (adultos y menores de edad).



3. MÁS POTENCIAL PRODUCTIVO PARA LIDERAR EL CRECIMIENTO DE LA REGIÓN

3.1 Consolidar y expandir las oportunidades productivas

República Dominicana cuenta con amplias posibilidades para expandir su potencial productivo y excelentes condiciones para promover el crecimiento de su sector exportador.



Según el Índice de Competitividad Global, la competitividad de la economía ha mejorado al pasar del lugar 98 al 82 de 141 entre el 2016 y el 2019. Sin embargo, el potencial productivo del país se ha limitado por sus bajos niveles de productividad.

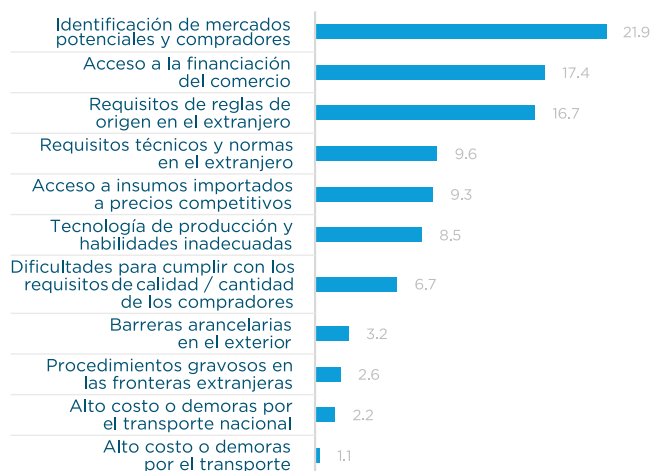


El sector exportador crece poco, se vincula débilmente con la economía local y su oferta es poco compleja y de bajo valor agregado. Esto a su vez genera una **pobre inserción del tejido empresarial** en las cadenas globales de valor, lo que ha limitado el progreso técnico y la capacidad de innovación.



La Inversión Extranjera Directa (IED) se concentra en los sectores no transables y las zonas francas, con mínima vinculación con el resto de las empresas dominicanas. Los avances en la competitividad también se han visto limitados por:

Factores más problemáticos para exportar



Fuente: "The Global Enabling Trade Report 2016".

Altos costos derivados de las brechas de infraestructura en energía eléctrica, transporte logístico y agua potable.

Limitaciones para acceder a fuentes de financiamiento sostenible y de largo plazo.

Una alta carga regulatoria que no fomenta mayores oportunidades comerciales o el emprendimiento innovador, ni habilita la participación del sector privado.

El inadecuado marco institucional de comercio e inversión.

Hay espacio para la transformación del sector agropecuario, que adolece de baja productividad y problemas de bioseguridad.



A pesar de tener gran importancia en la economía, agropecuaria es de las actividades menos productivas del país debido a la insuficiente inversión en investigación y desarrollo, la poca aplicación de nuevas tecnologías, y la limitada capacidad de los servicios públicos de sanidad vegetal y animal e inocuidad alimentaria para controlar plagas y enfermedades y asegurar la salud de los consumidores. Por el presente, la pandemia de COVID-19 ha generado disrupciones en la cadena de suministro, en el acceso a mercados y en la disponibilidad de mano de obra; disrupciones que en los próximos meses pueden traducirse en mayores pérdidas de ingreso, mayores costos de producción, dificultades financieras y reducción de la producción.

El turismo, otro sector clave, enfrenta momentos especialmente duros debido a la pandemia.



El turismo dominicano se caracteriza por una alta concentración de la demanda en Norteamérica y Europa Occidental, y una oferta concentrada en turismo todo incluido de sol y playa, en las zonas costeras del Este, que atrae viajes de recreación y ocio. Ambas características son fuente de vulnerabilidad por los efectos que tienen los ciclos recesivos de los mercados emisores sobre la llegada de pasajeros, y por los efectos del cambio climático sobre las zonas turísticas. Adicionalmente, el turismo se enfrenta a grandes desafíos en materia de gestión ambiental: la gestión de recursos sólidos y el consumo de energía, agua y el acceso y calidad de los servicios de saneamiento, que son retos importantes en todo el territorio nacional e impacta la viabilidad de los destinos turísticos. La pandemia de COVID-19 ha frenado en seco la actividad del sector, poniendo en duda la supervivencia de una gran parte de la oferta por la incertidumbre respecto al horizonte en que será posible reanudar las actividades de manera segura en el país, y el devenir de las economías emisoras.

Las limitadas oportunidades productivas y el bajo nivel de productividad influyen en la persistencia de altos niveles de informalidad laboral y bajos salarios.



Un 55% de la fuerza laboral se encuentra en el sector informal, donde predomina el empleo de bajo valor agregado. Los salarios reales se mantuvieron estancados desde 2003, repuntando solo a partir del 2017. Además, persisten sustanciales brechas de género, pues la tasa de participación laboral de las mujeres es 53%, 26 puntos menos que la de los hombres, y la brecha salarial se estima en un 22%. La crisis sanitaria ha devenido en la suspensión de casi 900,000 trabajadores formales (un 37% de los ocupados del sector formal), y el cese de operaciones de una gran parte del sector informal, conllevando pérdidas de empleo que no han sido cuantificadas aún. La crisis ha impactado más a las mujeres, pues estas se emplean en mayor proporción en los sectores más afectados por la crisis (servicios y comercio), y están sobrerrepresentadas en los empleos de atención de primera línea (trabajadoras de salud, cajeras de supermercados, farmacias).



ESCANÉAME



www.iadb.org/aguaRD

Oportunidades:

- Promover actividades productivas de exportación y de internacionalización de empresas con estrategias de diversificación de los socios comerciales, productos y servicios.
- Apoyar a los sectores y empresas con potencial de exportación en la diversificación de mercados y acceso a nuevos clientes, mapeando el proceso e identificando los cuellos de botellas para posteriormente expandir el servicio.
- Fomentar los encadenamientos productivos, vinculando las inversiones extranjeras con proveedores locales a través de esfuerzos de emparejamiento, certificaciones, estándares de calidad, etc. Investigar las necesidades de empresas extranjeras radicadas en el país para implementar acciones que mitiguen despidos en la crisis actual, y que sirvan para diseñar un plan de atracción de nuevas inversiones.
- Modernizar el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), quizá en un modelo público-privado, y adecuarlo a las mejores prácticas internacionales para que incluya programas de proveedores de servicios y apoyo integral a exportadores.
- Promover inversiones en actividades de mayor valor agregado, mejorando el entorno de negocios y el marco institucional, atrayendo empresas extranjeras anclas en sectores estratégicos y apoyando el proceso de internalización de las PYMES.
- Simplificar y reducir los costos de los trámites a empresas e inversores mediante la mejora de la plataforma RD+Simple y la implementación de una Ventanilla Única de Inversión (VUI) digital.
- Fortalecer los marcos legales de comercio e inversión extranjera, y actualizar la Ley General de Aduanas.
- Fortalecer las capacidades de investigación y transferencia de tecnologías agropecuarias, particularmente a través del desarrollo de enlaces con centros de investigación regionales e internacionales, con el objetivo de generar, adaptar y diseminar nuevas tecnologías agropecuarias que atiendan los problemas zoo-fitosanitarios, la adaptación y mitigación al cambio climático, y la gestión sostenible de los recursos naturales
- Fortalecer los servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria. En este ámbito, es particularmente importante:
 - Actualizar y fortalecer el marco de gobernanza legal e institucional de la sanidad agropecuaria.
 - Mejorar los sistemas de vigilancia, diagnóstico, control e inspección sanitaria en los diferentes eslabones de las cadenas agropecuarias, basándose en metodologías actualizadas de identificación y gestión de riesgos.
- Promover las buenas prácticas agrícolas, ganaderas y de manufactura, para evitar la propagación de plagas y enfermedades y la contaminación por agentes biológicos y químicos.
- Mejorar la gobernanza turística: mayor coordinación entre gobiernos locales y sector privado
- Acelerar el diseño de las nuevas medidas de seguridad integral y bioprotocolos, así como su implementación (infraestructura, señalización, capacitaciones, etc.) y socializar con el sector privado y la sociedad civil.
- Reforzar los sistemas de inteligencia de mercado turísticos, poniendo un particular foco a los análisis de la evolución de los diferentes segmentos de demanda post COVID-19 como base para efectuar estudios de competitividad comprensivos por destinos y un plan de recuperación reposicionamiento del sector en el medio y largo plazo.
- Diseñar e implementar una estrategia turística a largo plazo para diversificar la demanda y la oferta, con atención a la digitalización del sector y al posicionamiento en los canales digitales de distribución; y que incluya esquemas para el fomento del turismo interno y el mejoramiento de capacidades de la fuerza de trabajo.
- Identificar las oportunidades para mejorar la cadena de valor del turismo, aumentar el efecto multiplicador y elaborar estrategias comprensivas dirigidas a fomentar una mejor distribución de los beneficios económicos y sociales.
- Implementar un protocolo de reanudación de actividades económicas según criterios epidemiológicos que garantice la protección a los trabajadores.
- Desarrollar una estrategia de recuperación económica por sector productivo y de recuperación de empleos, asociada a un plan de formación de la fuerza laboral.
- Crear o adecuar los programas existentes para re-entrenamiento y/o capacitación y así poder integrar a los desempleados en los sectores en donde se abrirán o mantendrán los empleos, con un enfoque diferenciado en género.
- Diseñar programas de empleos compartidos para incrementar el número de personas con alguna fuente de ingreso.
- Explorar alternativas en la economía de plataformas para generar trabajo temporal, con posibilidad de vincular a las personas a programas de capacitación y de reinserción laboral en un empleo formal.

3.2 Infraestructura para la competitividad y sustentabilidad: agua potable, residuos sólidos, energía, movilidad y transporte sostenible

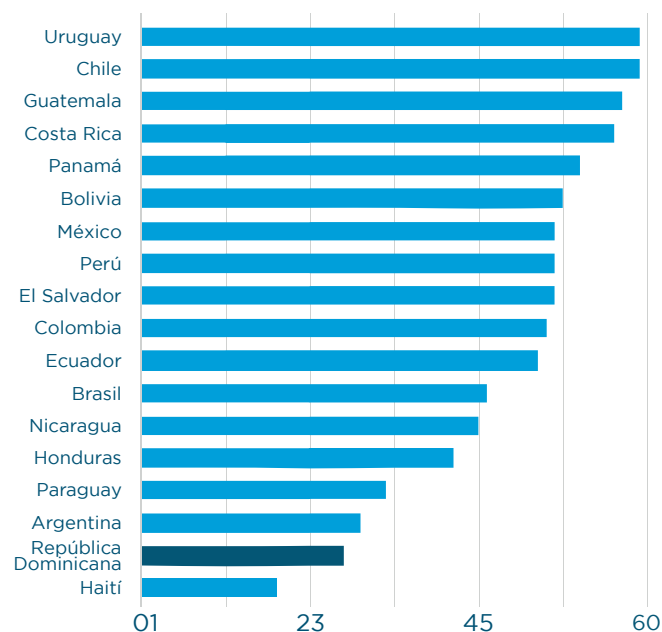
El desarrollo de infraestructura sostenible, especialmente en el sector eléctrico, es una de las tareas pendientes para aumentar la competitividad del país. Las empresas del país enfrentan un servicio eléctrico de difícil acceso, altos costos y baja calidad. Para tener conexión las empresas realizan un gran número de procedimientos (7 contra 5.5 en ALC), con largos tiempos de espera (67 días contra 66 en ALC) y luego el suministro es insuficiente y poco confiable. En promedio, el servicio se interrumpe 2.6 horas diariamente, lo que equivale a decir que un 11% de la demanda de energía no se abastece. Además, los costos de la energía son altos porque todavía un 40% de la generación proviene de combustibles fósiles importados y por las significativas pérdidas técnicas y operativas de la distribución y comercialización de energía. La crisis sanitaria ha agravado la situación de las distribuidoras porque ha resultado en una merma de los cobros por el servicio. Finalmente, el sector tiene dificultades para gestionar y dar seguimiento a sus propias políticas, como resultado de un marco institucional y regulatorio que genera incentivos difusos y solapa funciones.

En 2019, el gasto operativo en exceso de lo establecido en el Pacto Eléctrico costó al país alrededor de US\$200 millones.

Las pérdidas en la distribución por encima de la meta del 15% de la energía comprada costaron alrededor de US\$220 millones.

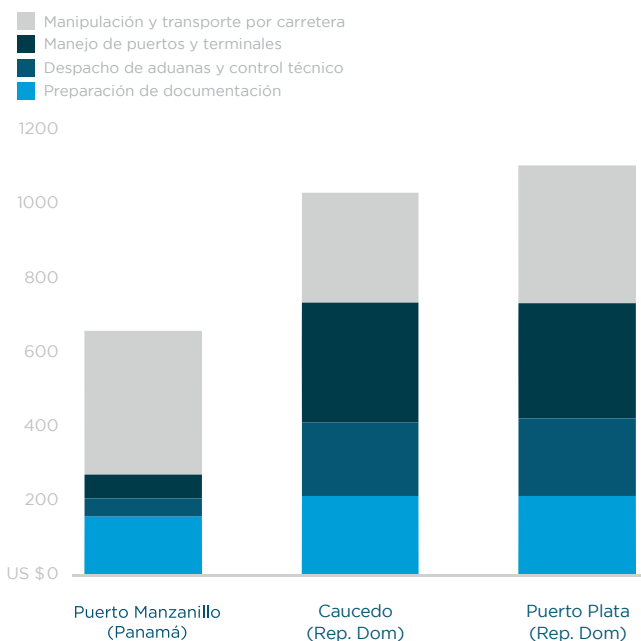


Calidad del suministro eléctrico



Fuente: Foro Económico Mundial

Costo de exportación en puerto antes del 2015



Fuente: Abad y Guerrero, 2013



Las brechas en los servicios provistos por la infraestructura de transporte y logística también reducen la competitividad.

Los costos que enfrentan las empresas para poder transportar y exportar sus mercancías son altos. El transporte automotor de carga (TAC) es el cuarto más caro de ALC y las deficiencias en la infraestructura comercial y aduanera generan que los costos de exportación en puertos puedan ser hasta un 50% superiores a los registrados por economías similares, como Panamá. La brecha en los servicios de infraestructura de transporte también se hace evidente a través de una insuficiente conectividad de la red vial, especialmente en ámbito rural entre centros de producción, distribución y consumo con los nodos de importación y exportación, donde la productividad de empresas y trabajadores se ve afectada por los mayores costos de transporte y tiempos de traslado, así como en el acceso de la población a servicios básicos. Por otro lado, los principales núcleos urbanos no cuentan con un sistema integrado de transporte público urbano accesible, seguro y eficiente, evidenciando una marcada congestión vehicular, elevadas emisiones contaminantes y alta accidentalidad. El COVID-19 hace que las limitaciones de movilidad urbana sean aún más acuciantes pues la estructura del sistema actual dificulta la implementación de medidas de distanciamiento social que prevengan los contagios.

En el Gran Santo Domingo los tiempos de viaje son de más de una hora y los gastos de transporte representan alrededor del 25% del ingreso de los usuarios. Esta proporción es alta en comparación a otras ciudades como Bogotá (16%) y Montevideo (8%).



Parte de las limitaciones de los servicios de transporte y logística obedecen a la falta de adecuación y actualización del marco institucional y regulatorio del sector.

La estructura empresarial relativa a la movilidad de personas y de carga es atomizada, informal y con baja capacidad de innovación tecnológica. Para el transporte automotor de carga se evidencia una reducida competencia en el mercado, una elevada tasa de viajes en vacío, sobreoferta vehicular y baja productividad. Esto ha generado prácticas oligopólicas que generan alzas en el valor del flete. Asimismo, la multiplicidad de trámites aduanales no centralizados en puertos y pasos de frontera, limitan los procesos de facilitación comercial, fiscalización y control y reducen la eficiencia logística. En materia de movilidad urbana se carece de: reglamentación que establezca los requisitos y condiciones para el otorgamiento de licencias de operación con el objetivo de reducir la informalidad; la definición de parámetros en materia de calidad de servicio, integración tarifaria y de estándares técnicos vehiculares; esquemas innovadores de renovación de flota con criterios de eficiencia energética; y soluciones tecnológicas de interoperabilidad del sistema integrado de billeteo electrónico. Lo anterior se enmarca en la ausencia de un esquema organizado de planificación del transporte que incentive la participación del sector privado a través de esquemas de asociaciones público-privadas (APP).



Las debilidades del sistema de agua potable y saneamiento y en la disposición de residuos sólidos atentan contra la sostenibilidad ambiental y la salud humana.

La infraestructura de agua es muy vulnerable ante inundaciones y sequías, e insuficiente para las exigencias de la agricultura o de determinadas zonas de carácter turístico, lo que compromete la calidad y suministro del agua potable ahora y, especialmente, en el futuro. La cobertura de los sistemas de alcantarillado y saneamiento es muy baja, apenas 20% en zonas urbanas y menor en las zonas rurales. Asimismo, el nivel de consumo per cápita es elevado, y han aumentado los niveles de contaminación de las fuentes de agua por la mala disposición de los afluentes y de los residuos sólidos. La infraestructura de disposición final de desechos sólidos es inadecuada, contando con alrededor de 358 vertederos a cielo abierto que conllevan significativos impactos ambientales.



La falta de un marco regulatorio efectivo y actualizado debilita la gestión y la coordinación de los operadores de estos servicios.

El sector agua y saneamiento se maneja en un marco regulatorio desactualizado, con problemas de definición y solapamiento de roles y responsabilidades entre reguladores y operadores. Las corporaciones de servicios de agua y saneamiento tienen bajos niveles de facturación y recaudación que dificultan realizar las inversiones para mantener y mejorar la calidad del servicio y reducir las ineficiencias. En tanto a los residuos sólidos, no existe un marco regulatorio vigente, y los ayuntamientos que se encargan del servicio tienen carencias financieras que impiden la gestión de los residuos. La industria del reciclaje local es aún incipiente, lo que aumenta la cantidad de residuos que llega a los vertederos.



Por su posición geográfica, el país está muy expuesto a desastres naturales y a eventos asociados al cambio climático.

Los principales sectores productivos, como el turismo y la agricultura, están ampliamente expuestos a desastres naturales, sin contar con los mecanismos adecuados de adaptación y mitigación. Las amenazas naturales generan impactos negativos sobre disponibilidad y el desempeño de la red de transporte, que afectan el tejido social y económico de una región, las oportunidades económicas y al acceso a servicios de educación y salud.



Oportunidades:

Sector eléctrico

- Mejorar la calidad del servicio eléctrico mediante la ampliación y diversificación de la matriz de generación de energía, optimizando las fuentes alternativas de energías renovables.
- Mejorar la gobernanza del sector eléctrico a través de una adecuada articulación de la estructura institucional; y garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas distribuidoras de energía (EDE), reduciendo gastos operativos, mejorando los procesos de entrega y cobro, y focalizando adecuadamente el subsidio eléctrico. En ese sentido, debe elaborarse un plan de pago para aquellos usuarios que suspendieron el pago del servicio durante la emergencia sanitaria.

Transporte y logística

- Orientar medidas hacia la consolidación de las cadenas de suministro de bienes esenciales en el presente contexto de crisis sanitaria, garantizando la circulación de mercancías con bioprotocolos para asegurar la protección de los trabajadores y la inocuidad; se sugiere la flexibilización de horarios, reducción de aranceles y eliminación o dinamización del esquema de peajes, además con la simplificación de procesos y trámites en aduanas y pasos de frontera para reducir costos y tiempos logísticos.
- Implementar el Plan Nacional de Logística 2020–2032 para fortalecer el marco regulatorio e institucional del sector de servicios de transporte y logística. Es necesario adoptar una reglamentación del transporte de carga que promueva esquemas de formalización sectorial y de libre competencia en la fijación tarifaria de fletes, así como lograr la mejora de la intermodalidad y de la oferta servicios de transporte y logísticos auxiliares de valor agregado sobre los segmentos prioritarios de comercio exterior del país.
- Ampliar la capacidad y calidad de los servicios portuarios, modernizando los procesos aduanales y de control de carga para reducir los tiempos y costos de exportación de mercancías.
- Implementar el Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial 2017 – 2020, enfatizando los aspectos de modernización normativa del otorgamiento de licencias de conducción y de las escuelas de formación vial; la habilitación de centros de inspección vehicular; la definición de estándares técnicos para la operación de vehículos de transporte públicos (pasajeros y carga) y privados.
- Implementar protocolos para minimizar el riesgo de contagio de COVID-19 en el transporte público urbano, a través de la desinfección constante del material rodante, instalaciones, paradas y estaciones, la señalización de circuitos de recorrido y distanciamiento en andenes o estaciones, usando comunicación audiovisual y la tecnología para la detección de distancias mínimas.
- Impulsar la movilidad activa (peatón y bicicleta) y la implementación de horarios variables en empresas privadas, instituciones públicas y escuelas para desconcentrar los picos de movilización en horas específicas de la mañana o tarde y reducir la congestión y los riesgos de contagio.
- Reorganizar el sistema de transporte público urbano hacia el transporte masivo de alta capacidad y de tecnologías limpias amigables con el medio ambiente (cero emisiones netas en el año 2050). El sistema debe seguir estándares de calidad del servicio, bioseguridad, mediciones de desempeño, criterios de igualdad de género e inclusión de población vulnerable. Debe incluir integración física y tarifaria de operadores públicos y privados, siguiendo un estándar tecnológico de interoperabilidad técnica, comercial e institucional para el recaudo electrónico.

- Potenciar los procesos de formalización empresarial de los sindicatos de transporte, y los esquemas de renovación vehicular hacia transporte masivo de tecnologías más limpias.
- Mejorar la oferta de los servicios de transporte a nivel regional a través de la mejora en la conectividad de la red vial rural, secundaria y troncal bajo parámetros de seguridad y resiliencia al cambio climático, favoreciendo la intermodalidad.

Agua y saneamiento, residuos sólidos

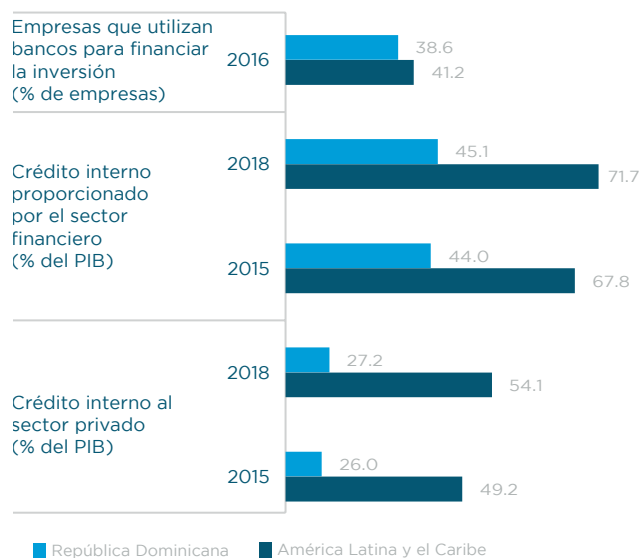
- Implementar programas integrales de mejora de la gestión de las empresas públicas de agua y saneamiento, priorizando la actualización de los catastros, la actualización de las tarifas, la instalación de medidores inteligentes y la optimización de la infraestructura existente. Acompañar estos esfuerzos con campañas para el uso racional del agua.
- Reformar la institucionalidad del sector agua potable y saneamiento, empezando por la aprobación de la Ley de Agua y el establecimiento de un ente regulador con responsabilidades claras y mecanismos para APP.
- Atender la gestión del agua de forma integral (enfoque de cuenca/multiuso), y no solo desde la perspectiva de servicios públicos básicos de agua potable y saneamiento, ya que existen cada vez más conflictos en el uso del agua entre agricultura, agua potable, energía y otros usos, en un contexto en que el recurso se hará cada vez más escaso.
- Construir y rehabilitar infraestructuras de almacenamiento y distribución de agua para usos múltiples y promover tecnologías y comportamientos que mejoren la eficiencia del uso del recurso (riego presurizado, goteo, campañas de ahorro).
- Avanzar con la planificación y la ejecución del plan para la mejora operacional y el posterior cierre del vertedero de Duquesa, el más grande del país. Asimismo, continuar los esfuerzos de Dominicana Limpia para cerrar vertederos regionales.
- Adoptar un marco regulatorio para la gestión de los residuos sólidos. La Ley de Gestión Integral y Co-procesamiento de Residuos debe reordenar el sector y establecer los mecanismos de financiamiento y sostenibilidad.
- Promover acciones de mitigación y adaptación al cambio climático con alto potencial productivo como la adopción de tecnologías bajas en carbono relacionadas con eficiencia energética y energías renovables; uso de productos agrícolas y pecuarios genéticamente modificados resilientes a sequías y aumento de temperatura.
- Aumentar la participación del sector privado en el financiamiento, desarrollo y operación de la infraestructura. Se recomienda avanzar en la implementación de Ley de las Alianzas Público-Privadas (APP), la consolidación del marco institucional asociado y el aumento de competencias para la identificación, análisis y estructuración de proyectos. Asimismo, promover modelos de operación y de prestación de servicios de APP, especialmente para el transporte y el sector agua y saneamiento.
- Rehabilitar o realizar las nuevas inversiones en infraestructura (transporte, telecomunicaciones, logística, energía, agua y saneamiento) con consideraciones de adaptación al cambio climático en su diseño, construcción y operación, al tiempo de promover inversiones en el uso sostenible de capital natural y servicios ecosistémicos.



3.3 Incrementar el acceso al financiamiento productivo

El sector productivo dominicano encuentra limitaciones de acceso al financiamiento. En el país se provee menos crédito al sector privado como porcentaje del PIB (26.6% en 2019) que en Honduras (64.7%), Costa Rica (60.5%) y El Salvador (50%). Este se destina principalmente a las grandes empresas (50%), dejando poco espacio a las MIPYMES, las cuales representan el 99% de las empresas existentes, aportan cerca del 39% de la riqueza nacional y la mayoría de los empleos (2.2 millones). Muchas de estas empresas son informales y el riesgo de su actividad es alto, generando menos oferta de crédito; en particular, para las del sector agrícola y las innovadoras y emprendedoras.

Indicadores de acceso a financiamiento



Fuente: Banco Mundial

La banca comercial es el principal oferente de financiamiento para el sector privado, pero la concentración del mercado (5 instituciones retienen el 75% de los activos) presiona al alza sus costos. Las líneas de crédito son de corto plazo y existen pocos instrumentos financieros adecuados a las necesidades de las empresas. Como alternativa el 60% de las empresas se financian con capital propio, con sus proveedores o

más recientemente en el sector de tecnología financiera (Fintech). El mercado de capitales es todavía incipiente y dominado por transacciones de bonos gubernamentales, alrededor del 92%.

Oportunidades:

- Ampliar la cobertura de crédito para MIPYMES como líneas de financiamiento y fondos de garantías de crédito, y aumentos en las líneas de préstamos concesionales, incluyendo la reestructuración de deudas para evitar quiebras de empresas viables durante la emergencia sanitaria. La estructuración de fideicomisos para instrumentar dichos programas es una opción para balancear el riesgo que conllevan. Explorar otros mecanismos de cofinanciamiento y *matching-grants*, apalancando recursos de la banca de desarrollo, especialmente destinadas a sectores con dificultades de financiamiento como el agrícola y para los más vulnerables pequeños y medianos productores, mujeres, jóvenes, etc.)
- Fortalecer la banca pública para ofrecer financiamiento de largo plazo a empresas de la cadena de exportación; y crear productos e instrumentos financieros adaptados a los riesgos inherentes de los sectores productivos y de las MIPYMES (como: *leasing*, *factoring* y fondos de capital de riesgo) y apalancando fondos públicos temáticos para emprendimientos innovadores.
- Implementar vehículos financieros para proveer garantías, deuda subordinada o capital a empresas con dificultades de acceso al sistema financiero, lo que puede ser facilitado mediante la implementación de la Ley del Sistema de Garantía Recíproca y la Ley de Garantías Mobiliarias.
- Fortalecer el mercado de capitales mediante la promoción de la participación de nuevos emisores del sector privado y el desarrollo de nuevos instrumentos financieros (como fideicomisos, ventas en corto, acciones preferentes, valores extranjeros, etc.) y valores temáticos con fines de desarrollo sostenible (bonos verdes, sociales, etc.)
- Trabajar en la regulación Fintech para que se amplíen operaciones de este tipo en el país y abarate el costo del crédito. Promover el uso de medios de pago digitales.



3.4 Potenciar la innovación, desarrollo tecnológico y formación técnica

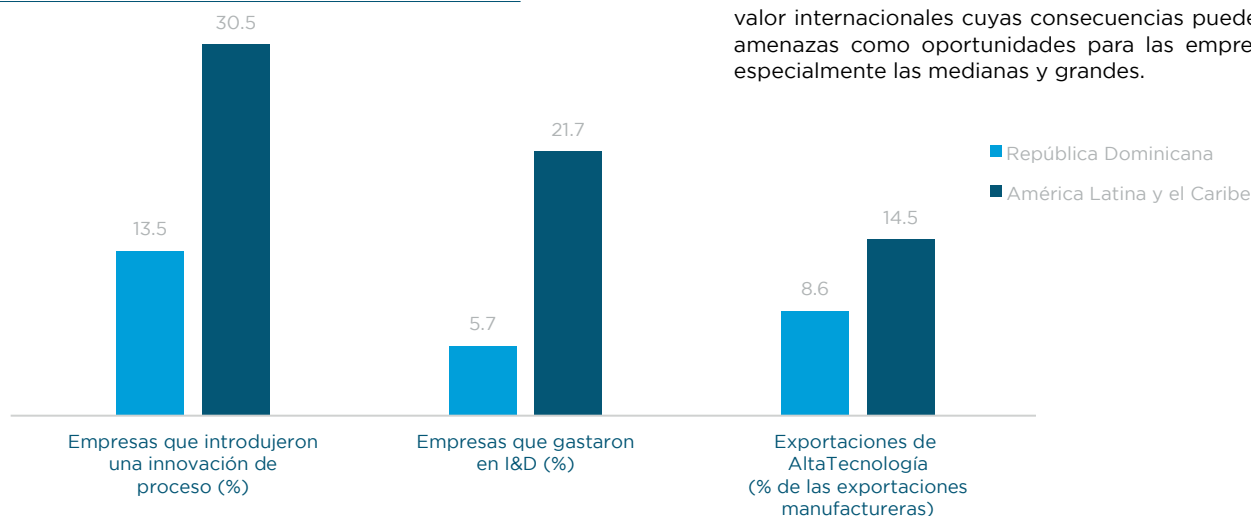
La innovación es la base para competir en un mundo de rápidos avances tecnológicos, pero el país se encuentra rezagada en esta materia. En particular, el país ocupó el puesto 85 de 140 países en el pilar de innovación del Índice de Competitividad Global (ICG), de 2019, detrás de la posición media de ALC (79/140); solo un 8.6% de los bienes que exporta tienen alto contenido tecnológico, y produce pocas patentes y artículos científicos.

Los bajos niveles de innovación de la economía obedecen, entre otros factores a: (i) la baja proporción de recursos públicos y privados que se destinan a la investigación y desarrollo (I&D); (ii) la falta de preparación y pertinencia del capital humano; (iii) dificultades de acceso al financiamiento para las empresas innovadoras, y (iv) la falta de un marco de gobernanza moderno y un ambiente adecuado para la facilitación de los negocios. En este último aspecto, el país ha venido realizando esfuerzos de fortalecimiento y está promoviendo contar con una Estrategia Nacional de Innovación 2020-2030, la cual coordinará las acciones de los sectores público y privado, con la participación de universidades y centros de investigación.

El país tiene poca capacidad de absorción tecnológica porque la población tiene bajas habilidades digitales y existe un bajo uso y acceso a las tecnologías de información. República Dominicana se encuentra por debajo de ALC en la calidad de infraestructura en telecomunicaciones según la Encuesta de Gobierno Electrónico de las Naciones Unidas de 2019. En 2018 el 51% de hogares contaba con suscripción a banda ancha móvil (60% en ALC) y el 68% de la población usaba internet (63% ALC). Esta brecha digital es mayor para los hogares de menores ingresos y que habitan en las zonas rurales. Si bien la brecha digital se ha cerrado entre hombres y mujeres, la falta de habilidades digitales de las mujeres empresarias generan desigualdades en las oportunidades dentro del sector productivo. Las condiciones antes mencionadas hacen que los niveles de emprendimiento vinculados a la innovación también sean bajos; de hecho, el país ocupó el lugar 11 de 24 a nivel regional en el Índice Global de Emprendimiento de 2018.

La crisis sanitaria ha provocado innovaciones en procesos, productos y modelos de negocio de muchas empresas. Ha afectado profundamente a las MIPYMES y los emprendimientos individuales, que tienen menos recursos y enfrentan mayores dificultades para navegar el periodo de confinamiento y la digitalización de operaciones. También ha devenido en alteraciones de las estructuras de las cadenas de valor internacionales cuyas consecuencias pueden ser tanto amenazas como oportunidades para las empresas locales, especialmente las medianas y grandes.

Indicadores de acceso a financiamiento



Fuente: Banco Mundial. World Development Indicators; Enterprise Surveys



Oportunidades:

- Consolidar un ecosistema para la innovación y el emprendimiento, aumentando los niveles de inversión pública y privada en Investigación y Desarrollo y promover mejores vínculos entre las empresas, universidades, centros de investigación, espacios de colaboración público-privados e instituciones públicas del sistema de innovación. Se sugiere la aprobación de la Estrategia Nacional de Innovación 2020-2030.
- Invertir en la formación de recursos humanos especializados mediante mejoras en la articulación entre la formación técnica, programas de empleo y el sector productivo, además de establecer estándares de calidad y certificaciones para cada sector o industria.
- Reformar el sistema de becas tomando en cuenta buenas prácticas internacionales y basando los beneficios en proyecciones de las necesidades del sector privado y los sectores estratégicos para el futuro.
- Desarrollar estrategias e incentivos para la ampliación de los programas de aprendices con un alto componente de capacitación directamente en el lugar de trabajo e incorporando un enfoque de género.
- Promover programas de formación aplicada a los clústers existentes y emergentes (turismo, economía naranja, etc.) siendo clave el desarrollo de talento para la economía digital.
- Profundizar los esquemas de apoyo a la digitalización de MIPYMES, orientados a abaratar los costos de conectividad y equipos, promoviendo la adopción tecnológica mediante créditos, subsidios y cofinanciamiento de licencias de software, aplicaciones y plataformas digitales, además de equipos de hardware y servicios de apoyo tecnológico.
- Expandir y reforzar los programas de extensión tecnológica en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para MIPYMES para acompañar a las empresas en el proceso de digitalización, cofinanciando estrategias de transformación digital, asesorías expertas y formación de competencias digitales a gran escala.
- Promover la recapacitación de la mano de obra, sobre todo en habilidades digitales incorporando un enfoque de género. Abrir *bootcamps* de programación y el fomento de destrezas digitales, democratizando su acceso mediante becas.
- Mejorar la infraestructura tecnológica y la conectividad del país, para fomentar un mayor uso de las TICs por parte de la población y un mayor alcance del gobierno digital.
- Profundizar la cooperación y los espacios de diálogo público-privado, dando continuidad a los esfuerzos y propuestas de reforma que salen de estas instancias.



4. MÁS CAPACIDAD DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE CHOQUES EXTERNOS

4.1 Implementar estrategias de adaptación y mitigación ante riesgos globales: climáticos y sanitarios

Debido a su posición geográfica, República Dominicana es altamente vulnerable a los desastres naturales y a los efectos del cambio climático, ubicándose en el puesto 12 de un total de 181 países en el Índice de Riesgo Climático Global de 2019. Se prevé que el cambio climático agudice esta vulnerabilidad en el futuro con un incremento de la frecuencia y severidad de eventos extremos, aumentando el riesgo sobre el desarrollo productivo del país (turismo, agricultura, etc.) y sobre la población más pobre y vulnerable que generalmente habita en las zonas más expuestas.

Asimismo, se han materializado nuevos riesgos sanitarios globales, como la pandemia del virus COVID-19, que pone en riesgo la vida de la población tanto por la propia enfermedad como por los efectos, indirectos que podría generar lo que se prevé como una de las mayores recesiones a nivel mundial. El país no es ajeno a esta crisis, la cual está afectando a sectores clave como el turismo. Al igual que otros países de la región, el sistema de salud estaba poco preparado para hacer frente a esta nueva contingencia y tiene limitadas capacidades para atender a la población afectada por debilidades en la planificación ante riesgos de desastres e insuficiencia de recursos. Los grupos más vulnerables que no cuentan con protección social, las personas de la tercera edad y mujeres serán los más afectados. Se estima que el 75% de los costos indirectos de esta pandemia serán asumidos por la población más pobre.

En un escenario extremo en que la epidemia de coronavirus se prolongue por 9 meses, las pérdidas de ingresos por turismo podrían rondar el 6% del PIB.

Oportunidades:

- Promover acciones de mitigación y adaptación al cambio climático para atender las necesidades regionales y locales de los servicios de salud según el mapeo del grado de exposición del territorio a eventos climáticos. De esta forma se puede proteger la salud de la población que presenta un mayor grado de vulnerabilidad ante estos impactos esperados.
- Ampliar la protección y la extensión de la cobertura forestal. Proteger y recuperar las principales cuencas hidrográficas (Yaque del Norte y del Sur, Yuna, Artibonito), así como los ríos menores de las zonas áridas del Suroeste.
- Invertir en las instituciones del sector de riesgo de desastre, fomentando mayor generación de conocimiento entre actores locales para consolidar la planificación a nivel nacional para distintos escenarios.
- Promover acciones de mitigación y adaptación al cambio climático con alto potencial productivo. Estas pueden incluir la adopción de tecnologías bajas en carbono relacionadas con eficiencia energética, energías renovables, y la construcción o remodelación de infraestructura resiliente.
- Mejorar la resiliencia de productos agrícolas y pecuarios ante sequías y aumentos de la temperatura. Para ello se pueden utilizar materiales genéticos más resilientes, mejores prácticas agrícolas que promuevan la protección de suelos, y mecanismos de aseguramiento contra riesgos.
- Aumentar la asignación presupuestaria para calamidades públicas en base a cálculos del impacto fiscal de los desastres, y ampliar los objetivos del fondo presupuestario para incluir infraestructura y apoyo económico y financiero post desastre.

5. EN RESUMEN

Hoy en el país confluyen varias dinámicas que lo ubican en un punto de inflexión en su camino hacia el desarrollo económico y social sostenible. El saludable crecimiento impulsó el aumento del ingreso per cápita y del empleo, así como significativas reducciones de la pobreza. Pero todavía una alta proporción de la población está en condición de vulnerabilidad y carece de acceso a los bienes y servicios esenciales para aumentar la calidad de vida y asegurar la movilidad social, situación que se agravará en los meses subsiguientes por los efectos de la crisis sin precedentes que ha provocado el COVID-19. La inequidad de oportunidades se conjuga con una economía vulnerable ante el contexto global cada vez más complejo, el inminente reto del cambio climático y los desafíos de la revolución digital, factores que generan nuevos desafíos en el camino al desarrollo. República Dominicana puede apostar a un gran futuro promoviendo una agenda de reformas que le permita cerrar sus brechas sociales y económicas, a la vez de preparar al país para afrontar estos nuevos desafíos. Para ello el país debe trabajar en pos de:

- **Más y mejores servicios de salud, educación y la prestación de servicios de protección social** para minimizar las pérdidas de vidas por condiciones sanitarias o enfermedades prevenibles y continuar cerrando las desigualdades sociales.
- **Más capital humano** en cada etapa del ciclo de vida, para que los dominicanos y dominicanas tengan mayor productividad, más oportunidades de encontrar mejores empleos, y un retiro digno en su vejez.
- **Más independencia y calidad en las instituciones** para promover la equidad, eficiencia, y la eficacia de las políticas públicas y la provisión equitativa de bienes públicos de calidad, garantizando sostenibilidad de las finanzas públicas
- **Más potencial productivo sostenible**, aumentando la competitividad de las empresas, minimizando los costos de la energía y transporte y habilitando nuevas oportunidades productivas, que generen empleos de calidad, promuevan la equidad de género y un crecimiento responsable con el medio ambiente y los recursos naturales.
- **Mayor reducción en las brechas de género que garanticen que dominicanas y dominicanos pueden acceder a oportunidades sociales y económicas en igualdad de condiciones.**

Es importante reconocer que todos estos desafíos convergen entre sí, por tanto, las acciones y políticas deben ser transversales, y maximizando las posibles sinergias entre ellas.



Referencias

ADESA. (2018). «Atención primaria en salud. Situación y retos en la República Dominicana». Santo Domingo: Autor.

Arenas de Mesa, A. (2019). «Los sistemas de pensiones en la encrucijada: desafíos para la sostenibilidad en América Latina». Libros de la CEPAL, N° 159 (LC/PUB.2019/19-P), Santiago: CEPAL.

CEPAL. (2019). «Panorama social de América Latina, 2019». (LC/PUB.2019/22-P/Re v.1), Santiago: Autor.

Cornell University, INSEAD, WIPO. (2019). «Global Innovation Index 2019 Creating Healthy Lives — The Future of Medical Innovation». Economic Profile Dominican Republic (p. 89). Ithaca, Fontainebleau, and Geneva.

Corporación Latinobarómetro. «Informe 2018». Banco de datos en línea, Latinobarómetro.

EDUCA, NEO y MEPyD. (2018). «Los jóvenes dominicanos, esos desconocidos. Estado de situación y políticas en materia de formación y empleo juvenil en la República Dominicana». Santo Domingo: Autores.

FAO en República Dominicana. «República Dominicana en una mirada». Recuperado de: <http://www.fao.org/república-dominicana/fao-en-república-dominicana/república-dominicana-en-una-mirada/es/>

INAP. (2006). Avances y obstáculos en la capacidad institucional del Estado, Centroamérica y República Dominicana».

Izquierdo, A., Pessino, C., Vuletin, G. y Banco Interamericano de Desarrollo (Eds.). (2018). Mejor gasto para mejores vidas: cómo América Latina y el Caribe puede hacer más con menos (Vol. 10). Inter-American Development Bank.

Marques, L. y Ozemela, G. (2019). «Desigualdades de género en República Dominicana 2018 – 2020». División de Género y Diversidad Sector Social, NOTA TÉCNICA IDB-TN-1632. DOI <http://dx.doi.org/10.18235/0001752>.

Mejía, F. y Gutiérrez, M. (2019). «Infraestructura, las piezas que faltan en República Dominicana». En revista Forbes Centroamérica, (dic 2019). Disponible en <https://forbescentroamerica.com/>

MEPyD. (2019). «Contexto actual del agua en la República Dominicana». Octavo Foro Mundial del Agua. Santo Domingo: Autor.

Abad y Guerrero, 2013, “Diagnóstico sobre el desempeño de los puertos y estudio de conectividad portuaria en Belice, Centroamérica y la República Dominicana.”

OCDE. (2015). «Perspectivas económicas de América Latina 2015: Educación, competencias e innovación para el desarrollo. Educación, competencias e innovación para una América Latina más dinámica e inclusiva». DOI:<https://dx.doi.org/10.1787/leo-2015-5-es>.

OCDE et al. (2019). Perspectivas económicas de América Latina 2019: Desarrollo en transición. Paris: OECD Publishing. DOI: <https://doi.org/10.1787/g2g9ff1a-es>.

Pérez Morillo, A. (2019). «Evolución del déficit habitacional y sus componentes conforme a la metodología oficial de medición, actualización a 2018». Documento elaborado para consulta (MEPyD). Santo Domingo.

PNUD. (2019). «Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: Desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI». En Informe de Desarrollo Humano 2019. Nueva York: Autor.

PNUD. (2019). «Avances y desafíos en la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Priorizados». En Informe 2019. Santo Domingo: Autor.

Roca, J. (2016). «Desafíos macro-fiscales de República Dominicana y opciones de reforma tributaria». Trabajo realizado para el BID. Santo Domingo: Autor.

Superintendencia del Mercado de Valores de República Dominicana (SIMV). (2020). Reporte mensual de estadísticas del mercado de valores dominicano, enero. Santo Domingo: Autor.

UNICEF. (2020). «La atención a la primera infancia: una estrategia para la reducción de la pobreza». Reflexiones de la representante de UNICEF, Françoise Gruloos-Akermans. Santo Domingo: Autor. Recuperado de https://www.unicef.org/república-dominicana/health_childhood_15592.htm

WEF. «The Global Enabling Trade Report 2016». Economic Profile Dominican Republic. Recuperado de <https://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2016/economy-profiles/>

WEF. «Global Human Capital Report 2017». Economic Profile Dominican Republic. Recuperado de http://reports.weforum.org/global-human-capital-report-2017/dataexplorer/?doing_wp_cron=1581667055.1207599639892578125000#economy=DOM

World Bank. (2020). «Enterprise Surveys: What Businesses Experience». Economic Profile Dominican Republic.

Bases de Datos

WEF. Índice Global de Competitividad.

World Bank. WDI.

Índice de Pobreza Multidimensional República Dominicana

Web sites: <https://presidencia.gob.do/plan-de-gobierno/salud-para-todos#capitulo-5>

Catalogación en la fuente proporcionada por la
Biblioteca Felipe Herrera del
Banco Interamericano de Desarrollo

BIDeconomics República Dominicana: oportunidades para un desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente / Joaquín Zentner, Fanny Vargas, Elizabeth Ochoa, María Cecilia Acevedo, Paula Castillo, Marcelo Paz, Juan Flores, Alejandra Durán, Joaquín Lennon, Adriana Valencia. Miguel Coronado, Marta Ruiz-Arranz.

p. cm. — (Monografía del BID ; 815)

Incluye referencias bibliográficas.

1. Sustainable development-Dominican Republic. 2. Economic development-Social aspects-Dominican Republic. 3. Infrastructure (Economics)-Dominican Republic. 4. Human capital-Dominican Republic. 5. Dominican Republic-Economic policy. 6. Dominican Republic-Social policy. I. Zentner, Joaquín. II. Vargas, Fanny. III. Ochoa, Elizabeth. IV. Acevedo, María Cecilia. V. Castillo, Paula. VI. Paz, Marcelo. VII. Flores, Juan. VIII. Durán, Alejandra. IX. Lennon, Joaquín. X. Valencia, Adriana. XI. Coronado, Miguel. XII. Ruiz-Arranz, Marta. XIII. Banco Interamericano de Desarrollo. Departamento de Países de Centroamérica, Haití, México, Panamá y la República Dominicana. XIV. Serie. IDB-MG-815

Códigos JEL: D63, H25, H26, H51, H52, H53, H55, H81, H83, I14, I15, I18, I24, I25, I38, J24, O14, O13, O31, O33, O43, Q18, Q56, Q53, Q54, R41, R42, Z32.

Palabras clave: desarrollo sostenible, crecimiento económico, República Dominicana, calidad en las instituciones, capital humano, productividad



Copyright © 2020 Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons IGO 3.0 Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode>) y puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas.

Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID, no están autorizados por esta licencia CC-IGO y requieren de un acuerdo de licencia adicional.

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.

